

Del pánico masivo a la pasividad.



A 20 años del falso tsunami pasamos del pánico masivo a la pasividad

El 16 de enero del 2005 un rumor infundado sobre un maremoto sembró el pánico en la región del Biobío. Miles de personas, empujadas por el miedo y la confusión, abandonaron sus hogares y se desplazaron a las zonas más altas, buscando refugio en los cerros. A pesar de que el evento nunca ocurrió, el temor fue real y evidenció la fragilidad de la confianza en los sistemas de alerta y en las autoridades que debían gestionar la información. Reflejó, además, la forma en que las sociedades modernas, son vulnerables a la desinformación y a la falta de un sistema de comunicación eficiente.

Solo cinco años después, el terremoto y tsunami de 2010, a pesar de que Chile ya contaba con tecnologías avanzadas de monitoreo sísmico, los retrasos en las alertas y los errores comunicacionales tuvieron un impacto directo en la capacidad de respuesta de las autoridades y de los ciudadanos. A horas del evento, gran parte de la población aún desconocía la magnitud de la tragedia que se avecinaba, lo que generó una parálisis en los primeros minutos cruciales tras el sismo. Hubo 550 muertes, muchas de ellas en el borde costero.

Hoy, en 2025, el país parece haber aprendido algunas lecciones importantes. Las alertas se generan en minutos, gracias a la tecnología avanzada, como el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Lo vivido tras el terremoto en Rusia, cuyas olas potenciales amenazaron nuestras costas, fue un claro ejemplo del salto que ha dado el país en cuanto a tiempo de respuesta y precisión en la comunicación, aunque queden aún cosas por afinar. En este nuevo escenario, la alerta llegó de manera casi instantánea, detallando los horarios estimados de la llegada de las olas y las zonas de riesgo.

Sin embargo, persiste una paradoja. A pesar de los avances tecnológicos y las mejoras en la educación sobre emergencias, la población chilena sigue siendo, en gran medida, reactiva más que proactiva. En un contexto de alertas reales como la actual, la sociedad se enfrenta a un fenómeno de desconfianza estructural. Los errores del pasado generan una especie de escepticismo que puede llevar a la inacción o a la pasividad frente a una emergencia real, además porque existe cierta creencia fomentada por las redes sociales, de que si no se cae un edificio no nos levantamos de la silla.

Aun con alertas rápidas y claras, la población a veces no reacciona como se espera. La falta de preparación emocional y de cultura de riesgo se entrelaza con la estructura social, que, aunque ha vivido crisis y desastres naturales de forma recurrente, no ha internalizado completamente la importancia de la acción inmediata, responsable e informada ante una amenaza.

Los desastres naturales son eventos a gran escala, muchas veces inesperados. Usualmente, se suele prestar más atención a las consecuencias materiales y físicas de los mismos. Sin embargo, las intervenciones en estas situaciones están incompletas si no se abordan aspectos de salud mental. Las consecuencias psicosociales asociadas a un desastre, entre ellas, problemas de salud mental, como el trastorno de estrés postraumático, trastornos depresivos, consumo de sustancias psicoactivas, etc., y las consecuencias psicosociales en la estructura familiar.

Las estrategias de intervención son variadas, y dependen del tiempo, la persona y el nivel de acción. Es necesario que, como país, tengamos diversas estrategias y modelos de intervención para intentar atenuar este impacto. Sin embargo, todavía hay barreras en el manejo de la salud mental, por lo que se hace necesario plantear posibles direcciones futuras a fin de lograr un menor impacto en la sociedad y una recuperación más temprana.

Si bien la evolución de los sistemas de alerta y la mejora en la educación sobre emergencias son pasos positivos, no son suficientes para transformar completamente la relación de la sociedad con la seguridad. Es necesario confiar en las autoridades y las tecnologías, pero también fomentar una cultura de responsabilidad y acción individual que comienza a temprana edad en las escuelas para contribuir con el aprendizaje escolar y social de las catástrofes naturales y que continúa con los planes de emergencia y evacuación en los lugares de trabajo. Asimismo, con el compromiso decidido de los gobiernos locales en conjunto con las organizaciones comunitarias.

En lugar de ser meros receptores de la información, los ciudadanos deben ser parte activa de la respuesta ante la emergencia. La

pregunta es si, finalmente, como sociedad, seremos capaces de superar nuestras propias limitaciones en cuanto a reacción y preparación ante lo inesperado.

Bernardo Neira Figueroa

Sociólogo, académico Psicología

Universidad Andrés Bello